



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, seis de diciembre de dos mil veintidós

22-018

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **ANGELA MYRIAM CASTAÑO ESTRADA**
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-020-2019-00060-01.
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones y Porvenir S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a la doctora SANDRA CECILIA USUGA ECHAVARRIA identificada con C.C. No. 30.028.782 y portadora de la T.P. No. 258.012 del C.S de la J, para representar los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES, identificado con c.c. 79.576.294 y TP. 103.505 del C.S. de la J. representante legal de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que acompaño, en su calidad de apoderado judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES–, de acuerdo con la escritura pública N° 3377 de 2 de septiembre de 2019 de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 35** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita la demandante, que tras la declaratoria de **NULIDAD** del traslado a la administradora del RAIS, se tenga como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad ordenándose a PORVENIR S.A. trasladar a COLPENSIONES todos los aportes realizados, junto con la rentabilidad y porcentaje de administración debidamente indexados, así como la diferencia que pudiesen llegar a darse entre los aportes realizados en el RAIS y los que deban acreditarse en el Régimen de Prima Media y consecuentemente se ordene a Colpensiones que los reciba y actualice su historia laboral.

Adicional a ello, pretende que se ordene a COLPENSIONES a reconocerle pensión de vejez y se le condene a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 en subsidio la indexación.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 27 de junio de 1959.
- ✓ Que estuvo afiliada al Régimen de Prima Media desde el año 1986 hasta el año 2000 cuando se trasladó al Régimen de Ahorro Individual a la AFP Porvenir S.A., data para la cual laboraba para el MUNICIPIO DE SABANETA y contaba con 460 semanas cotizadas.
- ✓ Que al momento del traslado los asesores de PORVENIR le indicaron que el ISS se iba a terminar, dado que era un sistema de pensiones insostenible y que si no se trasladaba de régimen perdería la posibilidad de acceder a una pensión de vejez, mientras que en el RAIZ podría pensionarse a la edad que quisiera y de forma anticipada, con una mesada superior a la que el ISS le pudiese otorgar, pero nunca le explicaron que requisitos y condiciones debía cumplir para acceder a dichos beneficios.
- ✓ Que PORVENIR no le informó sobre las diferencias de ambos regímenes, sus características, ventajas, desventajas de cada uno de estos, ni cuál era la fecha límite para regresar al régimen de prima media en los términos de la Ley 797 de 2003.
- ✓ Que según proyección realizada por Porvenir, al cumplimiento de los 62 años tendría una mesada pensional en el RAIS de \$937.700, lo que le resulta muy inferior a lo ofrecido en el RPM.
- ✓ Que el 27 de junio de 2016 cumplió los 57 años de edad y a la fecha cuenta con mas de 1.398 semanas cotizadas.

- ✓ Que el 17 de noviembre de 2018 solicitó a Colpensiones por vía administrativa el traslado de régimen al RPM, obteniendo como respuesta negativa ante tal solicitud.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtieron las entidades demandadas el derecho pretendido.

Inicialmente se pronunció COLPENSIONES a la que únicamente le constaba la fecha de nacimiento de la actora, su calidad de afiliada al ISS y la respuesta a la reclamación elevada ante esa entidad. Respecto de los demás hechos, señaló que al ser situaciones ajenas a esa entidad debían ser materia de debate dentro del proceso.

Por su parte PORVENIR S.A negó el incumplimiento del deber de información, manifestando que la afiliación realizada de la demandante con esa entidad fue de manera informada, libre y voluntaria, que recibió asesoría de manera verbal, que además se le brindó la información clara, suficiente y veraz acorde a la información suministrada por la accionante y en cumplimiento de las obligaciones vigentes para esa época.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín declaró no sólo la ineficacia de la afiliación al RAIS, sino además que la demandante había permanecido en el régimen de prima media sin solución de continuidad. Condenó a PORVENIR S.A. a trasladar a Colpensiones, en los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los valores, recursos, o sumas que hubiere recibido con motivo de la afiliación y traslado de la actora, como: cotizaciones obligatorias, gastos de administración, porcentaje deducido para pagar la prima de seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, bonos pensionales, descuento por aporte al fondo de garantía de pensión mínima, con los rendimientos que se hubieren causado, sin que haya lugar a deducir alguna comisión, sumas que debían ser indexadas con cargo a sus propios recursos, para corregir la pérdida del poder adquisitivo por fenómenos inflacionarios causados, sin que haya lugar a deducir comisión alguna.

Adicionalmente condenó a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez a la demandante en aplicación de las normas consagradas en la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, una vez acredite el retiro del sistema y/o a partir del día siguiente a la última

cotización realizada por la actora y que el retroactivo pensional que llegue a generarse debía ser indexado para compensar la pérdida de poder adquisitivo por el paso del tiempo.

Finalmente condenó en costas a Porvenir S.A. fijando como agencias en derecho la sumas de dos SMLMV a favor del demandante.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de la administradora del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

En cuanto a la pensión de vejez consideró que era procedente su otorgamiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones con la Ley 797 de 2003, dado que la accionante no sólo contaba con la edad mínima exigida, 57 años cumplidos el 27 de junio de 2016, sino además con una densidad suficiente de 1.398 semanas cotizadas al mes de noviembre de 2018, aclarando que Colpensiones debería realizar el reconocimiento a partir de la última cotización realizada por la actora, independientemente de que se haya registrado o no la novedad de retiro del sistema. Adicionalmente, consideró que no era procedente el reconocimiento de los intereses de mora, ya que Colpensiones se encontraba imposibilitada para reconocer la pensión de vejez para quien no era su afiliada en ese momento, sin embargo el retroactivo generado debería ser indexado para compensar la pérdida del valor adquisitivo por el paso del tiempo.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. APELACIÓN COLPENSIONES

Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta lo analizado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, cuando indicó que conforme al artículo 1604 del C.C. “la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”, no obstante lo anterior, dicha obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por

parte de su deudor, por tanto quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido, es decir, que tiene el deber de probar la obligación incumplida para que se presuma que se dio por culpa de la contraparte, quien en respuesta de tal cuestionamiento tendrá la carga de demostrar la diligencia o cuidado en la obligación pactada. Por lo tanto, insiste que corresponde al juez entrar a verificar si verdaderamente la demandante tiene derecho a retornar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, toda vez que con los presupuestos facticos introducidos en la demanda, se tiene que la actora se trasladó de régimen de pension de manera libre y voluntaria y que ha permanecido allí por más de quince años, además diligenció y suscribió válidamente una vinculación al RAIS manifestando su voluntad de pertenecer a ese régimen, bajo el entendido de que para una persona obligarse y como consecuencia su contrato sea válido debe cumplir los requisitos del artículo 1502 del Código Civil.

Agregó que de conformidad con la sentencia SL-373 del 2020, el objetivo perseguido con el limite temporal impuesto por el legislador de que no se pueden trasladar quienes les falte menos de diez años para la edad pensional, es evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, razón por la cual los afiliados al RAIS no pueden estar solicitando un traslado, cuando fue su decisión trasladarse de régimen, por lo tanto, se presume valida la solicitud de vinculación, sin que pueda ser posible anular su afiliación ya que el traslado efectuado a la AFP fue realizado en ejercicio del libre derecho de escogencia de régimen de conformidad con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Advirtió que se debía tener en cuenta que solo podría pedir la anulación del traslado efectuado si su firma hubiera sido falsificada en el contrato de afiliación, situación en la cual debe instaurar la respectiva acción penal por la presunta falsificación en documento (público o privado) ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar la veracidad o falsedad del documento, o si el empleador lo afilió sin su consentimiento, esto es que el formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado o por medio del traslado de régimen por sentencia SU 062 de 2010, lo cual no se da en el caso de autos.

Respecto al reconocimiento y pago de pensión de vejez, señaló que conforme lo analizó la Corte Constitucional en sentencia T-489 de 2010, debe tenerse en cuenta la sostenibilidad económica del sistema pensional que puede verse afectada, si las personas que no contribuyeron a la formación del fondo común, vienen en último momento, cuando les falta menos de 10 años, y se benefician de un ahorro comunitario accediendo a la pensión de vejez, por lo que debe revocarse del reconocimiento de dicha prestación y en su lugar absolver a COLPENSIONES.

2.2.2. APELACIÓN PORVENIR

Adujo que al momento del accionante vincularse con PORVENIR, esa entidad cumplió con el deber de información establecido para aquella época con fundamento en el Artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y no bajo los expuestos del Decreto 2241 de 2010, el cual, en el momento en que la afiliada realizó su traslado, no se encontraban vigentes.

Resaltó que en el interrogatorio de parte, la accionante reconoció conocer características del RAIS como lo era pensionarse anticipadamente, que la a quo en primera instancia no le dio valor probatorio a los archivos que se encuentran en la contestación de la demanda, en la cual hay un consentimiento informado de la demandante que afirma haber recibido información acerca de la Ley 100 de 1993 y el régimen de transición lo que demuestra que Porvenir si le dio información conforme a lo exigido en esa época

Por otro lado, solicitó que de confirmarse la declaratoria de ineficacia se revoque la condena de devolver los conceptos que integran la cuenta de ahorro individual de la actora, gastos de administración, seguros previsionales y además de la indexación, ello en razón a que esos descuentos no fueron hechos de manera caprichosa sino con el fin de la generación de frutos y rendimientos para cumplir las expectativas de los demandantes además cubrieron los riesgos de invalidez y muerte que no pueden retrotraerse ya que el servicio se prestó.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.3.1. PRESENTADOS POR COLPENSIONES

Señala que la obligación de Colpensiones de recibir a los afiliados que judicialmente deben trasladarse al RPM sin consideración de las implicaciones económicas y administrativas que estas providencias representan y al tener que asumir una defensa técnica en una relación jurídica sustancial de la cual en principio no hizo parte, es decir, la forma en que se vincula a Colpensiones en los procesos judiciales como litisconsortes necesarios, partiendo de la base que esta Administradora no participó en la celebración del contrato de vinculación, ni hizo parte del uso de maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993.

Agrega que se debe tener presente que la voluntad de la parte actora de poder emigrar de un régimen a otro, fue un derecho que ejerció al momento de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, hecho ajeno a Colpensiones y contemplado en el artículo 2 de la ley 797

de 2003 la cual modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su literal e, que no permite el cambio de régimen cuando a los afiliados les faltará menos de 10 años para adquirir la edad pensional. Restricción que tiene todo el sentido porque la administradora Colombiana de Pensiones no se ha establecido un total de capital para el debido reconocimiento y pago de una pensión en el futuro.

De otro lado indica que si bien, la parte actora argumentó que la afiliación al fondo privado se produjo como consecuencia de la existencia de vicios en el consentimiento, ausencia de consentimiento informado, el abuso de la posición contractual, y la manipulación de la información, e indica, que de haber sido suficientemente informada sobre las ventajas y desventajas de cada régimen, no habría aceptado el traslado. Debe tenerse en cuenta la carga dinámica de la prueba que en los eventos de traslado de Régimen, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sin atender las situaciones particulares de cada caso, invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de probar la existencia de un vicio del consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, obligando a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en cabeza de los fondos de pensiones, sin que exista un menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante. Exigencia probatoria que no ha podido ser acreditada por los fondos puesto que cuentan únicamente con los formularios de afiliación, conllevando que los fallos judiciales en la actualidad se expidan en contra de dichas entidades y de manera colateral afecten los intereses de Colpensiones.

Adicional a lo anterior, al ser la afiliación un contrato inter partes, los demandantes también tiene obligaciones que implican la aceptación de los efectos legales, costos y restricciones derivadas de esta. En el Decreto 2555 de 2010 se establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero y en su artículo 2.6.10.1.4 determina las obligaciones que debe atender el afiliado que pertenezca al Sistema General de Pensiones

Aduce que debe tener en cuenta la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, toda vez que el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros. En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Respecto a la condena impuesta tendiente a reconocer y pagar a la demandante la pensión de vejez junto a su retroactivo que llegare a generar mas la indexación, insiste en que ello no resulta

procedente ya que tal pretensión carece de fundamentación fáctica, afectando el derecho a la defensa de esa entidad, pues no basta con la sola solicitud de una pensión de vejez ni ser la consecuencia lógica de un traslado de régimen, pues es claro que cuando se presenta una demanda procurando que el poder judicial del estado resuelva el litigio acaecido con la persona demandada, el Art. 25 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, trae consigo una serie de requisitos formales que buscan ponerle de manifiesto los fundamentos fácticos con relevancia jurídica que sustentan sus pretensiones y para el caso es claro que la fundamentación fáctica de esta demanda está encaminada a la declaratoria de la ineficacia de traslado.

Solicitó que de confirmarse la sentencia de primera instancia, PORVENIR devolviera a Colpensiones los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la parte actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado y como lo estableció en su momento las sentencias 68838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 -2008; SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019, de forma indexada, toda vez que, durante este tiempo se privó de las mismas a esa entidad como se sustentó en la sentencia de la Corte Suprema De Justicia SL 1689 de 2019 M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

1.2.1. ALEGATOS PORVENIR S.A.

Señaló que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Prima Media con Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley pues PORVENIR al momento de realizar el traslado de la parte accionada al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte actora la información del Régimen de Ahorro Individual en diferentes momentos, esto es, de manera verbal en una reunión general y colectiva, otra reunión de forma personal al momento de suscribir el Formulario de Afiliación y finalmente dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Si lo anterior no fuera suficiente, la entidad ha hecho campañas masivas para la educación del consumidor financiero y ha realizado diferentes comunicados de prensa informando cambios normativos, como se puede extraer de la documental aportada con la contestación de la demanda.

Agrega que la prueba documental que extraña el juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado del demandante pues, esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, por lo que no es cierto que PORVENIR se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, lo anterior fue recapitulado y objeto de pronunciamiento en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464- 2019 en consecuencia, tales obligaciones no existían para la época de la afiliación y mucho menos las mismas se pueden aplicar de manera retroactiva. Igualmente no puede desconocerse el incumplimiento de la parte accionada del deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante, pues está dentro de su interrogatorio de parte, manifestó en diferentes ocasiones, no haber realizado comparaciones con otros Fondos Pensionales, no haber hecho preguntas o indagaciones en el momento de suscripción del formulario y no hacer uso de los diferentes canales de atención al usuario que tiene PORVENIR, por lo que debe revocarse la declaratoria de ineficacia del traslado.

De otro lado indica que en caso de confirmarse se debe revocar la condena de traslado de los dineros descontados por Gastos de administración, pues estas sumas tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a la cuentas de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. En el presente caso, es claro que dichos descuentos, han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta de la afiliada y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que se han venido disfrutando hasta la actualidad y que no pueden retrotraerse pues la cobertura y el servicio ya se ha prestado y este último no es posible devolverlo o retrotraerlo por parte del afiliado. Indica que atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas, derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico ordenando devolver o restituir un bien (en este caso una suma de dinero depositada) las sumas que invirtió para el mantenimiento de dicho bien e incrementarlo. Por si lo anterior fuera poco, se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera antojadiza, sino por el contrario se dio de acuerdo con el

mandato legal establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la ley 100 de 1993.

Agrega que toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que es imperioso en la actualidad, y de acuerdo a la coyuntura económica, hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, tal y como se estudió por este mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019 a las 2 PM en virtud de lo establecido en el artículo 35 del CGP donde decidió unificar su jurisprudencia, en sentencia dentro del proceso del proceso 05001310500720150129501 negando las ineficacias de traslado en la afiliación, con base en la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Las anteriores conclusiones frente a la ineficacia en la afiliación y en la manera en como deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema se han recogido y enriquecen con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000 el cual fue solicitado por ASOFONDOS.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se examinará qué haberes le corresponde retornar a Porvenir S.A, además se estudiará lo referente a la procedencia de la pensión de vejez.

No obstante, lo anterior conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento,*

ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En

tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 25 de julio de 2000 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR (fl 53 del archivo 01 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración.

Y es que expresamente la señora ANGELA MYRIAM CASTAÑO ESTRADA en el aludido interrogatorio expuso que es psicóloga y que labora como Profesional Universitaria en la Secretaria de Inclusión Social del Municipio de Sabaneta. Respecto del traslado a Porvenir rememoró que para esa época se acercaron los promotores de esta entidad a su lugar de trabajo, estos le presentaron a Porvenir como la mejor opción, ya que le manifestaron que el ISS se iba a terminar y por lo tanto ella quedaría sin pension, que adicional a eso, le dijeron que si se vinculaba con este fondo privado se pensionaría con mejores beneficios, aclarando que en ningún momento le dijeron que iba a tener una cuenta de ahorro individual, que sus aportes generarían unos rendimientos, que sucedería en caso de que ella falleciera y mucho menos lo que pasaría con los aportes realizados al ISS, sin

embargo ante el temor de quedarse sin pension firmó los documentos de afiliación pese a que no le brindaron una asesoría “con todas las de la ley”

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, aunque lo indicado por la demandante pudiese dejar entrever cierta información suministrada al momento suscribir el formulario de vinculación al RAIS, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada por la a quo,

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un

patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

Y en cuanto a la INDEXACIÓN, ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021, tal y como de forma aceptada lo ordenó la a quo, punto en el que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia.

Finalmente resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, la AFP deberá discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, aspecto en el que se **ADICIONARÁ** la sentencia.

De otro lado, respecto al **reconocimiento y pago de la pensión de vejez** bajo los postulados establecidos en la Ley 797 de 2003 que fue ordenada por la a quo, es de indicar, que en el caso de autos la señora **ANGELA MYRIAM CASTAÑO ESTRADA**, según lo confesó en el interrogatorio de parte, labora como Profesional Universitaria en la Secretaria de Inclusión Social del MUNICIPIO DE SABANETA y según se verifica en su historial de cotizaciones siempre ha realizado aportes con dicho empleador, por lo que es claro que ostenta la calidad de **empleada pública**.

Así las cosas, como el otorgamiento de la pensión de vejez, no es una consecuencia de la ineficacia pues, dicha pretensión tiene incidencia en el derecho pensional, por lo que al ostentar el demandante la calidad de **empleada pública**, debe tenerse en cuenta las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior al dirimir conflictos negativos de competencia sobre el tema, al advertir que cuando de ellos se trata, el conocimiento de los procesos tendiente a obtener la ineficacia o invalidez del traslado de régimen corresponde a la justicia ordinaria laboral, al ser el administrador de los aportes un fondo privado; pero como declarada la ineficacia se activa automáticamente la afiliación a COLPENSIONES, no es competencia de esta jurisdicción definir lo atinente al derecho pensional al satisfacerse los requisitos del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo está

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

instituida para conocer, además de lo dispuesto por la Constitución Política y en las leyes especiales, los procesos “...4. **Relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público...**”

Luego, con ocasión del retorno del RAIS por efectos de la ineficacia es el de prima media con prestación definida, administrado por COLPENSIONES, entidad que de acuerdo con la Ley 1151 de 2007, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, siendo la justicia contencioso administrativa la competente para definir lo relativo a todo lo concerniente al derecho pensional.

Sobre el particular es del caso traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-064 de 2016 cuando dijo:

“...la determinación adecuada de la jurisdicción que ha de resolver un litigio es un presupuesto de vertebral relevancia, en tanto de allí emana la validez misma del proceso, toda vez que un vicio como la falta de jurisdicción conlleva a que las actuaciones procesales resulten afectadas por una nulidad que no es susceptible de saneamiento alguno. Y agrega la Corporación: En esa medida, para la autoridad judicial que advierta la presencia de semejante defecto, resulta obligatorio declarar el vicio detectado y adoptar las medidas tendientes a que el trámite sea renovado con estricto apego al debido proceso. De esa forma, el juez consigue legitimar la administración de justicia y concretar la eficacia de los derechos de las partes enfrentadas, materializando así los fines estatales que la Constitución ha trazado. Por el contrario, aquel juez que evada dicho imperativo, eludiendo las funciones que le atañen como director de la contienda, perpetuará la transgresión del debido proceso y avalará la perversión derivada de las decisiones dictadas tras un juicio enteramente antijurídico....”

Por consiguiente, estima la Sala que debe REVOCARSE el numeral quinto del fallo que reconoce la pensión de vejez a la actora, para en su lugar declarar la falta de competencia frente a dicha pretensión-

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE en cuanto a la declaración de ineficacia, ADICIONÁNDOLA** en los aspectos antes aludidos y **REVOCANDO** y declarando la falta de competencia en cuanto a la pensión de vejez.

Se condenará en costas en esta instancia a Porvenir S.A a favor de la demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 por cada entidad. Dicha condena NO se extenderá a Colpensiones dado que fueron acogidos en esta instancia algunos de los planteamientos esbozados en el recurso de alzada.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **ANGELA MYRIAM CASTAÑO ESTRADA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.981.726 contra **PORVENIR S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: se **ADICIONA** el numeral **segundo** del fallo, bajo el entendido que PORVENIR S.A al momento de dar cumplimiento a la sentencia, deberá discriminar los conceptos entregados a COLPENSIONES, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REVOCA el numeral **QUINTO** del fallo para el su lugar declarar la falta de competencia para conocer de la pensión de vejez

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **ANGELA MYRIAM CASTAÑO ESTRADA**
Demandado: **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: **05001-31-05-020-2019-00060-01.**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **06/12/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **07/12/2022** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario